

SESIONES ORDINARIAS

2000

ORDEN DEL DIA N° 102

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

Impreso el día 18 de abril de 2000

Término del artículo 113: 2 de mayo de 2000

SUMARIO: **Oficiales superiores de las fuerzas armadas. Ascenso al grado inmediato superior y otras cuestiones conexas. (221-S.-1999.)**

I. — Dictamen de mayoría.

II. — Dictamen de minoría.

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional, ha considerado el proyecto de ley en revisión, por el cual se asciende a varios oficiales superiores de las fuerzas armadas al grado inmediato superior y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 12 de abril de 2000.

Miguel A. Toma. — Fernando R. Montoya. — Guillermo A. Francos. — Pedro Salvatori. — Ramón H. Torres Molina. — Mario F. Ferreyra. — Juan P. Baylac. — José M. Díaz Bancalari. — María R. Drisaldi. — José L. Fernández Valoni. — Francisco A. García. — Dulce Granados. — José H. Jaunarena. — Beatriz M. Leyba de Martí. — Carlos Maestro. — Javier Mouríño. — Lorenzo A. Pepe. — Hugo D. Toledo. — Arnaldo M. P. Valdovinos. — Pedro A. Vélica.

Buenos Aires, 1º de diciembre de 1999.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Ascíendase al grado inmediato superior con fechas 31 de diciembre de 1983, 5 de julio de 1984 y de 4 de marzo de 1985, respectivamente, a los señores generales de división (retiro), don Jorge Hugo Arguindegui (fallecido) (MI 5.127.219), don Ricardo Gustavo Pianta (MI 4.037.570) y don Héctor Luis Ríos Ereñú (MI 5.986 471).

Art. 2º — Considérese como fecha de ascenso al grado que actualmente ostentan el almirante (R) don Ramón Antonio Arosa (MI 5.133.186), teniente general (R) don José Segundo Dante Caridi (MI 4.805.917), el brigadier general (R) Ernesto Horacio Crespo (MI 6.916.333) y el brigadier general (R) don Teodoro Waldner (MI 7.465.154) a aquella en la cual fueron designados jefes de Estado Mayor de sus respectivas fuerzas.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

JOSÉ GENOUD.

Mario C. Pentaquarto.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional al considerar el proyecto de ley en revisión venido del Honorable Senado, cree necesario dictaminar la propuesta original en razón de reconocer los servicios prestados por los oficiales mencionados en el proyecto, logrando así un justo reconocimiento y una mejor gestión parlamentaria, dando curso favorable al dictamen que antecede.

Miguel A. Toma.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley en revisión del Honorable Senado por el cual se asciende a varios oficiales superiores de las fuerzas armadas al grado inmediato superior, y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, se aconseja en minoría su rechazo.

Sala de la comisión, 12 de abril de 2000.

Alfredo P. Bravo.

INFORME

Honorable Cámara.

La Comisión de Defensa Nacional, al considerar el proyecto de ley en revisión del Honorable Senado cree necesario rechazar la propuesta enviada por las siguientes razones:

Tenemos ante nosotros un proyecto de ley con media sanción del Honorable Senado que dispone ascender al grado inmediato superior a los generales de división retirados Jorge Hugo Arguindegui, Ricardo Pianta y Héctor Luis Ríos Ereñú. Como ocurre con otras iniciativas, es nuestro deber de legisladores analizar la coherencia de la propuesta con el resto del cuerpo normativo vigente y aclararnos el porqué y el para qué del proyecto.

a) *Respecto a la coherencia.* Como bien lo señala el senador Jorge Villaverde, al fundamentar uno de los proyectos que impulsan los ascensos a los que nos referimos, el artículo 61 de la ley 19.101 dice que "el retiro es definitivo, cierra el ascenso y produce vacante en el grado". Porque la ley es "clara y terminante y no deja resquicios para interpretaciones que permitan soslayar su claro mandato", Villaverde propone que el ascenso se realice mediante "una ley de la Nación, que en tal caso, será una excepción —violación, a mi modo de ver— del artículo 61 de la ley 19.101".

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley de Defensa Nacional (23.554) dispone en su segundo párrafo que los jefes de estados mayores generales de las fuerzas armadas serán designados por el señor presidente de la Nación entre los generales, almirantes o brigadieres del cuerpo comando en actividad.

Es decir, que habilita para ocupar las respectivas jefaturas, a los generales de brigada y de división en el Ejército, a los contralmirantes y vicealmirantes en la Armada y a los brigadieres y brigadieres mayores en la Fuerza Aérea, siempre y cuando estén en actividad y pertenezcan al cuerpo comando.

Aunque aún no regía la ley 23.544, esta potestad presidencial ya estaba vigente cuando el presidente Raúl Alfonsín dispuso designar sucesivamente en la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército a los por entonces generales de brigada Arguindegui, Pianta y Ríos Ereñú. ¿Puede entonces conferírseles el grado de teniente general? La respuesta es negativa, porque la ley 19.101, vigente desde 1971, dispone en el acápite 2 de su artículo 49 que: A teniente general, almirante y brigadier general, ascenderán únicamente los generales de división, vicealmirantes y brigadieres mayores que sean nombrados para ocupar los cargos de jefe del Estado Mayor General del Ejército, jefe del Estado Mayor General de la Armada y jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

Reiteremos que Arguindegui, Pianta y Ríos Ereñú accedieron a esos cargos como generales de brigada;

por tanto, su promoción a tenientes generales constituiría otra excepción —a decir de Villaverde— u otra violación —a decir de quien suscribe— de la ley 19.101, de la cual sería responsable el Poder Legislativo si aprobara el proyecto de ley en discusión.

Con lo dicho hasta aquí queda perfectamente fundamentada nuestra disidencia respecto al proyecto en tratamiento dada su incoherencia con la normativa vigente;

b) Respecto al porqué de la iniciativa. En general, el legislador encuentra respuesta a este interrogante al indagar en torno a la justicia y/o necesidad de lo que se pretende imponer a través del acto legislativo.

En este caso, la necesidad surgiría de una presunta deuda pendiente de las instituciones que el senador Villaverde señala al decirnos que su iniciativa apunta a “que las instituciones de la República tengan un especial reconocimiento hacia aquellos hombres de armas que comandaron las fuerzas durante un período especialmente traumático de la naciente democracia recuperada en 1983”.

El planteo del senador lleva implícita una valoración positiva respecto de la actuación de los beneficiarios de su proyecto en los años inmediatos a la recuperación de la democracia.

Como no podemos asimilar esa valoración implícita sin antes repasar desde cierta perspectiva histórica a aquellos años, digamos que el período especialmente traumático al que se refiere Villaverde corresponde a la etapa en que la sociedad debatió qué hacer con los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado, con los que idearon, ordenaron y ejecutaron:

- La desaparición forzada de decenas de miles de personas.

- La apropiación de menores nacidos en cautiverio y la privación de identidad de los mismos.

- La detención y puesta a disposición del Poder Ejecutivo de miles y miles de hombres y mujeres privados del debido proceso.

- Las condenas tácitas o explícitas al exilio exterior o al no menos doloroso exilio interior.

- La censura aplicada en todos los niveles de la actividad ciudadana.

- La disolución —en fin— de las instituciones de la democracia y la usurpación de los poderes de la República.

Todas estas atrocidades fueron las herramientas que posibilitaron el inicio de un proceso de redistribución regresiva de la riqueza y de injustificado crecimiento de la deuda externa de nuestro país, proceso que, sin duda, será reconocido por la historia como característica distintiva del último cuarto del siglo XX y determinante de las actuales pésimas condiciones de vida del pueblo argentino.

Pues bien, ante la disyuntiva de qué hacer con los responsables del terrorismo de Estado, se instalaron dos consignas básicas. Una, predominante en

la sociedad civil, pedía castigo a los culpables. La otra, fomentada desde los propios ámbitos castrenses, pretendía impunidad. A los generales Arguindegui y Pianta les tocó ejercer la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército en medio de esta polémica. El general Ríos Ereñú, en cambio, lo hizo cuando la polémica derivó, como veremos, hacia otras cuestiones.

Lo que sigue es una recopilación de dichos y actitudes de los generales Arguindegui y Pianta mientras fueron jefes del Ejército y que son todo un testimonio de sus aportes a la transición democrática.

Arguindegui, Jorge Hugo (16 de diciembre de 1983 al 4 de julio de 1984, 202 días de ejercicio): este ex miembro de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), organismo que usurpó las funciones del Congreso de la Nación durante la dictadura militar, fue el primer jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En ejercicio de su cargo fue protagonista de los siguientes hechos:

— Al quinto día hábil del gobierno de Alfonsín asumió su cargo. Invitó a participar de la ceremonia de su asunción a Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Antonio D. Bussi. Los dos primeros, junto a Galtieri, Massera, Lambruschini, Anaya, Agosti, Graffigna y Lamé Dozo, habían sido incluidos tres días antes en el decreto 158 por el cual el presidente promovía la persecución penal de los nombrados como autores mediatos o inmediatos de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. Ante el hecho y según testimonios de época, el entonces ministro de Defensa Raúl Borrás evaluó la posibilidad de remover del cargo a Arguindegui.

— Tras hacerse cargo de la Jefatura del Ejército, Arguindegui dio a conocer la nueva cúpula militar. En la jefatura del V Cuerpo designó al general Mario Davico, ex jefe del tristemente célebre Batallón 601 y de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor. Era además un especialista en guerra sucia que había participado de la injerencia militar argentina en Centroamérica, donde entrenó y financió a mercenarios nicaragüenses y envió tropa propia a Tegucigalpa, Panamá, San Salvador y San José¹.

— Junto a sus pares de la Armada, contraalmirante Ramón Arosa, y de la Fuerza Aérea, brigadier Teodoro Waldner, Arguindegui negoció con Borrás la iniciativa del gobierno de modificar el Código de Justicia Militar. Según el proyecto gubernamental la jurisdicción militar sólo sería de aplicación en aquellos delitos contemplados por el código cas-

¹ "El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel acercó a la Casa Rosada los antecedentes de Damico, Alfonsín se los giró a Borrás y el general cambió de destino. A partir del 20 de enero pasó a dar órdenes sólo en su casa..." Horacio Verbitsky (1987), *Civiles y militares; memoria secreta de la transición*, Editorial Contrapunto, Buenos Aires.

trense que no estuviesen incorporados al Código Penal. Los jefes militares lograron imponer que para los hechos anteriores a la reforma se debía respetar el principio del juez natural. Con lo cual, las atrocidades cometidas durante la dictadura quedaban bajo jurisdicción militar con la consiguiente violación del artículo 16 de la CN² y del 18 de la misma norma³. Como se recordará, esta maniobra derivó en que el Consejo Supremo de las FF.AA. se hiciese cargo de las causas para, a través de procedimientos amañados, dilatar su tratamiento y posibilitar los sucesivos planteos y condicionamientos castrenses al poder civil.

— En abril de 1984, al referirse a la represión ilegal, Argundegui dijo a un cronista televisivo que el método empleado debía analizarse en función del resultado. La ambigüedad de la expresión quedará superada, como veremos más adelante, por otras declaraciones suyas.

— El 29 de mayo de 1984, al celebrarse el Día del Ejército, dijo que el general Luciano Menéndez era un demócrata. El calificativo otorgado al otrora amo y señor de Córdoba fue recogido al día siguiente por los medios y potenciado por declaraciones del jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 de Catamarca, quien —tras honrar a los que combatieron en los montes tucumanos al enemigo marxista y ateo que pretendió cambiar la bandera azul y blanca por un trapo rojo— advirtió que el Ejército estaba alzado para detener cualquier agresión interna o externa. El militar no se refería a agresiones contra el país, sino contra la institución a la que pertenecía.

— El 25 de junio de 1984, un grupo de oficiales respaldados por el comandante del III Cuerpo de Ejército, general Pedro Pablo Mansilla, se amotinó para presionar al juez federal Julio Miguel Rodríguez Villafañe⁴, quien había dictado prisión pre-

² “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”

³ “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa...”

⁴ Durante el proceso, Rodríguez Villafañe fue uno de los firmantes de la nota que se enviara al embajador estadounidense en Argentina Raúl Castro en la que se le requería que el presidente Jimmy Carter dejara de hacerse eco de las influencias de agitadores argentinos en el exterior. Uno de los agitadores identificados en la misiva era nada más y nada menos que Julio Cortázar.

ventiva por homicidios alevosos contra los capitanes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Mones Ruiz. El juez cedió a las presiones, se declaró incompetente y remitió el expediente al Consejo Supremo de las FF.AA. que dispuso la libertad de ambos capitanes.

— Mientras esto ocurría, el mismo Mansilla se negaba a facilitar el ingreso de miembros de la Conadep a las instalaciones del III Cuerpo. Ernesto Sábato se quejó de tal actitud ante el presidente de la Nación. La simultaneidad de estos episodios hizo que el gobierno ordenara a Argundegui sancionar a Mansilla. Pero como este último mantuvo sus posturas, las autoridades nacionales dispusieron su pase a retiro como también el relevo de Argundegui por no haber sido capaz de imponerse a un subordinado.

Pianta, Ricardo Gustavo (del 5 de julio de 1984 al 4 de marzo de 1985, 243 días).

— A fines de agosto propuso una ley de amnistía que beneficiase a los militares con causas abiertas en el Consejo Supremo de las FF.AA.

— Por entonces, Pianta escuchó en silencio una declaración efectuada por el presidente del arma de Comunicaciones, Ernesto Della Croce, quien reivindicó lo actuado durante el terrorismo de Estado y aseguró que el alma castrense estaba en paz consigo misma. Aunque esas expresiones constituían una contundente apología del delito, Pianta no aplicó ni la mínima sanción a su emisor.

— En septiembre, Pianta y sus compañeros de promoción ofrecieron una misa en acción de gracia. Para oficializarla, convocaron a quien había sido provicario castrense, Víctor Bonamín, el mismo para quien el último gobierno castrense había sido obra de la providencia.

El 3 de enero Pianta sumó sus dichos a la catarsis de declaraciones militares que durante el cambio de año habían reivindicado al terrorismo de Estado y propuso estar alertas y mirar a todos los lugares del mundo donde a diario suceden actos de terrorismo.

— El 14 de enero el coronel Miguel W. Abatte dijo, en rueda de prensa, que las FF.AA. estaban inquietas por el viaje a Nicaragua de una brigada juvenil comunista recolectora de café, porque allí podrían recibir adoctrinamiento y preparación subversiva. Complementariamente, se quejó por los bajos salarios militares y, en una típica operación de acción psicológica, dijo que los secuestros de empresarios que por entonces se sucedían recordaban los ocurridos durante la década de los 70⁵. Los dichos de Abatte eran por contenido, modalidad y objetivos un revival de la Doctrina de la Seguridad Nacional en plena transición democrática. Como en los casos an-

⁵ Posteriormente, la Justicia determinó que los responsables de los secuestros a los que aludía el militar habían sido perpetrados por elementos de la llamada "mano de obra desocupada".

teriores, Pianta no reprendió a Abatte, pero en esta ocasión, su dejar hacer y decir, lo hizo pasible de un apercibimiento verbal por parte de las autoridades de Defensa.

— Las posturas pro procesistas de Pianta no alcanzaron a satisfacer a sus colegas. Se desató así una virtual rebelión del generalato que lo acusó de ser blando ante el gobierno. Cuando el ministro Borrás comprobó que Pianta no controlaba a sus subordinados, lo relevó del cargo.

— Con lágrimas en los ojos, Pianta se despidió del Ejército. En su discurso para la ocasión presentó a las jornadas de lucha contra la subversión como páginas imborrables del acervo histórico de la patria.

Los 445 días que consumieron las jefaturas de Arguindeguy y de Pianta, coincidieron, en buena parte, con el tiempo que insumió, la discusión de quién juzgaría a los militares —tarea que en definitiva recayó sobre el Consejo Supremo de las FF.AA. y con las dilaciones recurrentes del tribunal de justicia militar en resolver las causas de las que se había hecho cargo—. Cansada de las maniobras del Consejo Supremo, la Cámara Federal sostuvo que “la tramitación dilatoria es lo más parecido a la denegación de justicia” y decidió avocarse a la causa 13, y en abril de 1985 comenzaron las audiencias públicas del juicio a las tres primeras juntas. Con los ex comandantes sentados en el banquillo, la resistencia militar se orientó a evitar que la justicia se extendiera hacia abajo en la cadena de mandos. A esta nueva etapa correspondió la jefatura de Ríos Ereñú.

Ríos Ereñú, Héctor Luis (desde el 4 de marzo de 1985 a abril de 1987).

De su trayectoria como jefe del Ejército, pueden —a modo de ejemplo— evocarse los siguientes episodios:

— El 19 de mayo de 1986 el presidente Alfonsín visitó las instalaciones del III Cuerpo de Ejército. En esa ocasión, la policía cordobesa encontró una bomba en el camino que debía transitar el presidente dentro del predio militar. Ríos Ereñú intentó restarle importancia al episodio diciendo que el artefacto explosivo carecía de detonador. Poco parecía importar en la explicación del militar que se tratase de un acto de intimidación dirigido expresamente a la máxima autoridad de la República.

— En setiembre de 1986, por orden del presidente pasó a retiro el comandante del II Cuerpo de Ejército, general Jorge Eduardo Gorleri por haber manifestado ante el ministro de Defensa que no permitiría que ninguno de sus subordinados fuese sometido a la justicia civil. En su reemplazo, Ríos Ereñú puso al general Ernesto Alais, cuñado de Suárez Mason, hermano de un comisario que formó parte de la Triple A, y hoy recordado por su lentitud. En el acto de asunción, el jefe del Ejército exaltó los valores de la gesta antsubversiva.

— También en setiembre de 1986 comenzó a hacerse público el caso de la joven estudiante puntana

Graciela Flocchetti, secuestrada, torturada y asesinada en su provincia diez años antes. Un testigo incriminó en el caso al entonces subjefe de Policía de San Luis, por entonces capitán, y que en las nuevas circunstancias revistaba como teniente coronel y se desempeñaba en el Estado Mayor Conjunto del Ejército. Ríos Ereñú participó de las negociaciones políticas tendientes a que su subordinado dejase de estar procesado en la Cámara Federal de Mendoza y se convirtiera en imputado no procesado en la causa Flocchetti.

Pero más allá de estos episodios, la orientación que su labor en la jefatura del Estado Mayor General del Ejército fue preanunciada en la primera arenga que Ríos Ereñú pronunció ante la fuerza el 12 de marzo de 1985. En ella destacó la subordinación militar al poder civil, encomió el modo en que el gobierno enfrentó lo que él llamó secuelas de dolor, agravio y heridas de la guerra sucia, aprobó la formación de la Conadep, el decreto que ordenaba juzgar a las juntas y la aplicación del principio de obediencia debida⁶.

La referencia a la obediencia debida marcó el destino de la gestión de Ríos Ereñú al frente del Ejército: negociar salidas que posibilitaran eludir la acción judicial, más aún, luego del 9 de diciembre de 1985 cuando la Cámara Federal sentenció en la causa 13. En el punto 30 de ese fallo ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas enjuiciar a los oficiales superiores que ocuparon las zonas y subzonas durante la lucha contra la subversión y a todos aquellos que tuvieron responsabilidades operativas en las acciones. Pero la historia no quedaba allí cerrada. Las negociaciones del gobierno con los jefes militares, entre ellos Ríos Ereñú, dieron origen a lo que se conoció como instrucciones a los fiscales (abril de 1986) que el jefe del Ejército enarboló ante sus subordinados como un éxito de su gestión, y que se constituyó en antecedentes de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida como también de los decretos de indulto que vendrían más adelante.

El 5 de mayo de 1986, ante unos 300 jefes y oficiales superiores del Ejército, Ríos Ereñú se refirió a las instrucciones en los siguientes términos⁷.

⁶ Cabe recordar que el aludido principio de obediencia debida, que por entonces comenzaba a pegarse como salida a las demandas militares tendientes a poner en marcha mecanismos que les permitiera eludir la acción de la Justicia, se convirtió con el tiempo en ley. Tanto ella como la de Punto Final fueron derogadas en 1998 por esta Honorable Cámara. Dicha derogación no incluyó la declaración de nulidad de sus efectos tal como pretendimos los autores del proyecto.

⁷ Se reproducen textualmente las palabras de Ríos Ereñú respetándose la puntuación y ortografía de la transcripción original. Lo resaltado en bastardilla es de mi responsabilidad.

"Para poder comprender con claridad el tema de las instrucciones hay que analizar primero cómo se llega a esta situación.

En 1976 las fuerzas armadas hicieron promesas a la ciudadanía que no fueron cumplidas porque los objetivos del proceso no se cumplieron, generando un sentimiento de frustración. A esto se agregó el de la guerra perdida en Malvinas y que había conitado el apoyo general. Por lo tanto todas esas frustraciones se transfirieron en un sentimiento de bronca contra los militares.

Además hay que tener en clao que la victoria militar contra la subversión no se materializó de igual modo en el campo político, por lo que la guerra contra la subversión fue una guerra perdida.

Así se llega a las elecciones que fueron para el Ejército una retirada desorganizada sin que se pudiera negociar nada. Por ello el poder político impone su política sobre el tema y ello genera una serie de restricciones a la institución. Este es el lastre de las cosas como son y con las cuales nos tenemos que mover. Independientemente de ello existen voces de agiadecimiento (y que son cada vez más) pero que como no quieren pagar el costo político se expresan en la oscuridad.

¿Qué vamos a hacer como institución para mejorar nuestra imagen? Primeramente todo dentro de la ley. Porque a mí me vienen cada dos por tres con ideas vacías que no solucionan nada; hacer un golpe ahora es postergar el problema para dentro de diez años, porque un golpe es reprimir y se puede reprimir cualquier cosa menos el pensamiento. Por lo tanto el tema hay que resolverlo hoy y con las limitaciones mencionadas.

Para ello entonces hay que reinsertarse en el esquema institucional; esto está claramente expresado en la directiva del JEMGE. El objetivo es ganar la confianza del poder político para llevar a la institución al sitio que le corresponde y solucionar el problema de las secuelas de la lucha contra la subversión.

Este punto todos los partidos políticos se plantearon cómo resolverlo, y hasta nuestros propios camaradas también tienen su opinión como los del CEMIDA, por lo tanto si nuestros propios camaradas piensan así, qué no pensará el resto de la población; aunque a nosotros nos preocupa más lo que dicen nuestros camaradas que el resto de la población.

El gobierno como decisión política categorizó el tema en tres niveles. los que dieron las órdenes, las que las cumplieron y los que se excedieron. Pero además rechazó la comisión bicameral que pretendían las Madres de Plaza de Mayo y por eso creó la Conadep. También se reformó el CJM para dejar bien en claro el principio de la obediencia debida. Entonces, ¿cómo se encuentran las fuerzas armadas en este momento? Acotadas por un lado por el acatamiento al orden institucional y por otro por el legítimo derecho de defensa de lo actuado.

Si bien éstos son hechos políticos con final político, ahora lo daremos como una batalla jurídica. Vino entonces el decreto 158, el juzgamiento de los comandantes y las sentencias; en ellas lo más preocupante era el punto 30 y por eso se crearon organismos de asesoramiento para todos los implicados.

En síntesis, el balance es muchas nubes negras y es un mínimo de detenidos es decir una batalla con pocas bajas.

Cuando se intentó buscar el punto final, se tiró la posibilidad de establecerlo por decreto, pero la repercusión extremadamente negativa, pinchó la posibilidad; sin embargo, esto sigue siendo visto como una necesidad por distintos sectores políticos e inclusive por el propio presidente, por ello firma las instrucciones.

Para la institución ¿cuál es la línea de no ceder? El asunto no es cortar en algún grado sino pagar el menor costo final. Está claro que una ley de amnistía no tiene espacio político; inclusive hay diferentes opiniones entre los distintos sectores del gobierno.

Entonces se va a dar a cada tema el tratamiento según el tiempo y el espacio posible. Para ello es imprescindible armarse de paciencia y entender que el jefe de Estado Mayor se maneja con el poder real dentro del tiempo y el espacio que le marca el poder político. Así podemos ir buscando los intersticios en cada poder como en este caso de las instrucciones.

Las instrucciones son favorables a nosotros porque por ello arreciaron las críticas (como las del coronel García)⁸.

Con respecto a las mismas tenemos que tener en claro lo siguiente:

1. Origen: el Poder Ejecutivo.
2. Principios: el de la obediencia debida.
3. Finalidad: buscar el medio más rápido para terminar el problema.
4. Sustento: el mismo fallo de la Cámara.

Veamos que se aclaran jurisdicciones concentrando los casos en el lugar donde se impartían las órdenes (Cdos. Cpo.). Además eso evita repeticiones y dobles pruebas.

Strassera dijo que iban a acusar a 1.500 delitos y acusó por 600 y por ellos no pudo acusar a todos, por lo cual algunos fueron sentenciados y otros absueltos.

El fallo de la Cámara dice que ninguno de los acusados cometió el delito directamente. Los sentencia por la teoría del dominio del hecho, por autoría mediata por el dominio de la voluntad del ejecutor. Cómo juega ahora el tema de la obediencia debida: si los responsables de las órdenes que impusieron una metodología "aberrante" ya fueron sancionados son cómplices únicamente los que se excedieron. Si la metodología era lo aberrante y por

⁸ Se refiere al secretario general del CEMIDA.

ello ya fueron sancionados los responsables, quiénes se excedieron: únicamente aquellos que no hayan cumplido las órdenes.

Además, el presidente no va a dar ninguna directiva adicional.

Esta es entonces la situación, quedará para el futuro cuando el tiempo y el espacio lo permitan si es que podremos reivindicar a nuestros comandantes".

La explicación de Ríos Ereñú a los mandos superiores del Ejército tenía como destinatario al conjunto de la fuerza, por entonces dividida entre quienes descreían de alternativas golpistas y preferían presionar orgánicamente al poder civil y los sectores "duros" que recalentaban los motores de los tanques para amenazar la continuidad de las instituciones democráticas.

Los hechos posteriores evidenciaron la incapacidad de Ríos Ereñú para superar la división del Ejército y subordinar a los "duros" que en la Semana Santa de 1987 se pintaron la cara y determinaron, entre otros condicionamientos, el relevo del jefe del Ejército y la forzada aprobación de las leyes de punto final y obediencia debida que actuaron como protectora de militares acusados de cometer los más aberrantes crímenes.

He deseado con esta evocación de un pasado no lejano refrescar el desempeño durante los albores de la transición democrática de estos jefes militares a los que se pretende ascender indebidamente al grado de teniente general. Si los dos primeros actuaron como defensores y hasta panegiristas de lo actuado durante la dictadura militar, el último se dedicó a presionar al gobierno del doctor Alfonsín para evitar que el "castigo a los culpables" que reclamaba la sociedad civil descendiera por la cadena de mandos castrenses.

Llama la atención que este proyecto, originado en una iniciativa del gobierno menemista que se tradujo en un proyecto de ley de excepción que va a contramano de las normas vigentes, sea tratado por la Comisión de Defensa pocos días después de que el Senado brindase acuerdo para que oficiales denunciados por su participación en la represión ilegal, sean promovidos al grado inmediato superior.

Parecería que una Nación que tiene como asignatura pendiente la sanción a los genocidas, no sólo habría renunciado a ese propósito, sino que además estaría premiando a los autores de crímenes aberrantes y a quienes no han renunciado a reiterarse en la apología del delito.

Porque no queremos avalar este tipo de premios, pedimos que la Honorable Cámara considere este dictamen de minoría y rechace el proyecto de ley que nos remitiera el Senado.

Alfredo P. Bravo.